

Empresarios, pacto político y coyuntura actual en México

Edmundo Jacobo
Matilde Luna
Ricardo Tirado

La profunda crisis que vive México en la década de los ochenta ha generado un proceso de transformaciones que también ha incidido en la renovación del empresariado como fuerza política y en las características de las relaciones entre el Estado y los empresarios.

El agotamiento del modelo de desarrollo seguido, la crisis económica y la nacionalización de la banca privada en 1982, son algunos de los factores más importantes que influyeron en las transformaciones experimentadas por el empresariado y que aún no llegan a consolidarse plenamente.

El conflicto por la nacionalización de la banca desató una crisis de representación del empresariado. Aún bajo nuevas condiciones —como el desarrollo del sistema bursátil que restituyó gran parte de su poder a la fracción financiera y a pesar del acuerdo básico entre el gobierno y la cúpula empresarial en cuanto a la política de desarrollo a adoptar, la decisión unilateral afectó de manera profunda las relaciones entre el gobierno y los empresarios, induciendo a éstos a asumirse públicamente como actores políticos y a desplegar nuevas formas de intervención política, orientadas a asegurar su participación efectiva en las decisiones económicas y políticas. Tiene lugar así una reconfiguración de las facciones políticas empresariales, que se distinguen unas de otras, entre otros elementos, por las bases en que se sustentan, las organizaciones a través de las cuales se expresan y las estrategias de participación política que promueven.

La búsqueda de una salida a la crisis, las presiones de los acreedores extranjeros y la reacción de los empresarios, en el marco del auge internacional de la ideología neoliberal, precipitaron la reformulación de las políticas de desarrollo prevalecientes durante más de treinta años, que se caracterizaban por una significativa intervención del Estado (tanto a través de mecanismos de regulación como de

empresas públicas), por una política proteccionista y por una atención prioritaria hacia el mercado interno.

La nueva estrategia ha tendido a la liberalización, aun cuando cautelosa, de los controles gubernamentales, a la privatización de las empresas públicas, y a una apertura hacia el mercado externo; políticas éstas que han contribuido a la conversión de la empresa privada y las "fuerzas del mercado", en los ejes en torno de los que se reestructura la economía nacional.

Cinco años después del inicio de la aplicación de estas políticas, persistían aún los signos más perversos de la crisis: el estancamiento e incluso el retroceso de la economía, el dramático deterioro del nivel de vida de muy amplios sectores de la población, un gigantesco endeudamiento externo e interno, altas tasas de inflación, graves desajustes financieros y acusados movimientos especulativos. Esta situación sería el marco en el cual se firmaría hacia finales de 1987, el llamado Pacto de Solidaridad Económica, acordado por los representantes de los sectores gubernamental, social y privado.

Desde una perspectiva política más amplia, desde principios de la década se vive también un cuestionamiento del régimen presidencialista y una revitalización de la política de partidos, que han puesto en entredicho al sistema de partido dominante —que ha operado durante casi 60 años—, situación que en parte ha sido alimentada por una participación más activa de los empresarios en los partidos políticos y en los procesos electorales.

En este contexto general, el propósito de este trabajo es presentar un panorama de las características que definen al empresariado como una nueva fuerza política, y de las tendencias que se dibujan en las relaciones entre el Estado y los empresarios en la actual transición sexenal y que serán un punto de partida del nuevo gobierno. Para ello se pro-

curó identificar a las facciones políticas empresariales que se configuran a raíz del conflicto por la nacionalización de la banca y analizar los cambios en las relaciones entre el gobierno y los empresarios, a la luz de la firma del Pacto de Solidaridad Económica y la coyuntura electoral de 1988.

Las normas tradicionales de la acción política empresarial

Una visión global del periodo que va de finales de los años treinta a principios de los ochenta, muestra que los empresarios siempre intervinieron en la actividad política, pero lo hicieron de diferentes maneras, según las peculiaridades de las distintas coyunturas.

A pesar de estas diferencias, pueden establecerse algunas constantes del comportamiento político empresarial en México, que podrían expresarse así: a las coyunturas de conflicto entre los empresarios y el gobierno (vinculadas en general con intentos de reformismo estatal, movilizaciones populares y desajustes económicos), se asocia un comportamiento político empresarial de alto perfil, que se concentra en impedir los avances del reformismo, incrementar su cuota de poder político directo e influir en la definición de los grandes derroteros del proceso de desarrollo del país.

En cambio, las coyunturas de concordia entre los empresarios y el gobierno se corresponden con un tipo de intervención política empresarial centrada en la formulación y la ejecución de las políticas públicas y en particular en la política económica. De acuerdo a estas distinciones entre coyunturas de conflicto y de concordia entre los empresarios y el gobierno, pueden calificarse como pertenecientes al primer tipo, pese a muchas diferencias, el régimen del presidente Cárdenas (1934-1940) y ciertas fases de los de López Mateos (1958-1964), Echeverría (1970-1976)¹ y López Portillo (1976-1982).

Por el contrario, los regímenes de los presidentes Ávila Camacho (1940-1946), Alemán (1946-1952), Ruiz Cortines (1952-1958) y Díaz Ordaz (1964-1970) se caracterizaron por la ausencia, en general, de conflictos entre los empresarios y el gobierno. Cabe aclarar aquí que durante el periodo 1940-1973, el conflicto fue en general excepcional y que la normalidad de la relación fue de acuerdo e incluso de amplio consenso.

Otra particularidad de la intervención política empresarial fue su naturaleza cíclica, de modo tal

que a los periodos de conflicto caracterizados por la tensión, la movilización y la politización empresarial, les sucedieron, hasta fines de los setenta, periodos de distensión, reflujo y despolitización.

En los periodos de politización empresarial, fue recurrente que algunos de sus líderes pasaran a la militancia política, incluso partidaria; generalmente dentro de las filas del partido oficial, tratando de mitigar desde adentro, las causas del conflicto, pero también, lo más notable, acudiendo durante esos conflictos al partido político tradicional de la derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), con la intención de implantar una fuerza externa a la derecha del gobierno, que lo moderara. De hecho, como es bien sabido, el PAN nació, con una importante participación empresarial, al calor de la reacción anticardenista que con el movimiento almazanista disputó la presidencia de la República a Ávila Camacho en 1940.²

Por contraste, en los periodos de concordia y por lo mismo de reflujo, distensión y despolitización, los empresarios tendieron en general a abandonar al PAN y a otorgar un apoyo amplio, aunque más bien tácito y difuso, al partido oficial.³

Fue así que para principios de los años setenta podía reconocerse un conjunto de reglas del sistema que normaban el comportamiento político de los empresarios y que pueden sintetizarse así: 1. Los empresarios no eran actores políticos legítimos del sistema. Las leyes que rigen las organizaciones empresariales de afiliación obligatoria, prohíben a éstas inmiscuirse en asuntos políticos. 2. Por tanto no debían hacer política partidaria. El partido oficial se negó a constituir en su seno un "sector empresarial" paralelo a los sectores obrero, campesino y popular. 3. Podían intervenir en la formulación y ejecución de la política económica y en la toma cotidiana de decisiones, y así lo hacían con gran intensidad y eficacia; y 4. También podían, pero de manera velada y mediante negociaciones cupulares, intervenir en los procesos de designación de los funcionarios y candidatos del partido oficial. Ha sido típico del sistema político mexicano el rejuego dentro del PRI de muy diversos grupos e individuos, para influir en el ánimo del gran elector, el presidente de la República, al momento de hacer las designaciones de prácticamente todos los candidatos a puestos de elección y funcionarios importantes de los tres poderes y los tres niveles de gobierno.

² Tirado, Ricardo, "Los empresarios y la derecha en México", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, vol. XLVII, año XLVII, núm. 1/85, enero-marzo de 1985.

³ Luna Matilde, Tirado Ricardo y Valdés Francisco, "Los empresarios y la política en México, 1982-1986", en R. Pozas Horcasitas (comp.), *Los empresarios y las empresas de México*, Editorial Grijalbo, en prensa.

¹ Martínez Nava, Juan Manuel, *Conflicto Estado-empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría*, México, Nueva Imagen, 1984.

Para 1970, fuera de una fase conflictiva al comienzo del sexenio de López Mateos (1958-1964), este conjunto de reglas del pacto social había regido ya durante más de 30 años y se había convertido en uno de los componentes del sistema político nacional.

Pero la tensión de mediados de la década de los setenta entre los empresarios y el gobierno, comenzó a poner en cuestión estas reglas. Ante una nueva oleada de reformismo oficial, desajustes económicos y movilizaciones populares, los empresarios respondieron con gran energía, derrotando a la postre al reformismo.⁴

Las concesiones otorgadas por el gobierno de López Portillo (1976-1982) y la euforia del "boom" petrolero tuvieron el efecto de restañar otra vez, como en el pasado, las diferencias entre los empresarios y el gobierno. Pero cuando sobrevino en 1981 una nueva fase de la crisis económica y el gobierno procedió a la nacionalización bancaria, se inició un nuevo ciclo de conflicto que no ha sido aún superado.⁵

Las nuevas facciones políticas empresariales

En los estudios sobre la participación política de los empresarios, ha sido común hablar sobre todo de dos facciones históricas: la de los radicales y la de los moderados,⁶ mismas que se han definido por el grado de su beligerancia y oposición al gobierno. Sin embargo, la crisis y el conflicto político han contribuido a la redefinición o emergencia

de nuevas corrientes político-ideológicas, que de diferentes maneras han puesto en cuestión las normas del comportamiento político empresarial antes definidas.

De manera que dentro del amplio espectro de posiciones del empresariado, se distinguen ahora, en este trabajo, tres principales: la proteccionista, la populista o liberal conservadora y la tecnocrática.⁷ La facción proteccionista tiene su origen en la corriente que en otros estudios se denomina "moderada" y la populista en la "radical", pero son ahora diferentes. La tecnocrática, es una nueva facción surgida al calor de la crisis.

La proteccionista está constituida, sobre todo, por los representantes de la industria pequeña y mediana tradicionalmente orientada hacia el mercado interno, que en la coyuntura actual resiente negativamente los efectos de la apertura comercial y es incapaz de acceder a otros mercados. Sus organizaciones básicas son la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y en menor medida, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín). La intervención política de esta facción se caracteriza, en el discurso, por la demanda de protección. En cuanto a la acción política propiamente dicha, lo más característico es la creciente tendencia de sus líderes a vincularse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) procurando ganar espacios políticos más amplios para defender su demanda principal.⁸ Pese a lo numeroso de sus bases reales y latentes, la importancia y el peso de esta posición es actualmente marginal.

La facción tecnocrática se orienta principalmente a la formación de un nuevo marco de relaciones político administrativas en el que predominan criterios de eficiencia y productividad por oposición a criterios "políticos" o "populistas" y pugna por el establecimiento de relaciones bilaterales (gobierno-empresarios) en la formulación de las políticas públicas y por ganar una posición más determinante en la toma de decisiones de carácter público.

La facción populista, se caracteriza sobre todo

⁴ Arriola, Carlos, *Los empresarios y el Estado*, SEP, Sep. 80, núm. 3, México, 1981; Saldivar, Américo, *Ideología y política en México: 1970-1976*, México, Siglo XXI Editores, 1980; Tirado, Ricardo y Luna, Matilde, "La politización de los empresarios (1970-1982)", en J. Labastida (comp.), *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, México, Alianza Editorial Mexicana y Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca Iberoamericana, núm. 6, 1986; y Valdés, Francisco, "Una aproximación al análisis de las relaciones entre empresarios y gobierno en México, 1970-1976", en J. Labastida (comp.), *op. cit.*

⁵ Hernández Rodríguez, Rogelio, *Empresarios, banca y Estado. El conflicto durante el gobierno de José López Portillo, 1976-1982*, México FLACSO-Miguel Ángel Porrúa, 1988; Tirado, R. y Luna, M., *op. cit.*; Gaspar, Gabriel, *Comportamiento sociopolítico de las agrupaciones empresariales mexicanas. (Desde la fundación del Consejo Coordinador Empresarial hasta la víspera de la crisis)*, s/f, mecanografiado.

⁶ Sobre las facciones empresariales pueden verse: Derossi, Flavio, *El empresario mexicano*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1977; Concheiro, Elvira, et al., *El poder de la gran burguesía*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1979; Puga, Cristina, "Dos proyectos de la burguesía mexicana", en UAM-Iztapalapa, año 1, núm. 1, México, julio-diciembre de 1979; Arriola, C., *op. cit.*; Tirado, Ricardo, "La alianza con los empresarios", en R. Loyola (comp.), *México entre la guerra y la estabilidad*, México, Editorial Grijalbo, en prensa; Luna, M., Tirado R. y Valdés, F., *op. cit.*, y Jacobo, Edmundo, "Las relaciones Estado-empresarios, ¿hacia un nuevo pacto social?", en R. Pozas Horcasitas (comp.), *op. cit.* y "Nuevo empresario, viejo político", en *El Cotidiano*, México, año 4, núm. 18, julio-agosto de 1987.

⁷ El término populista tiene en este trabajo un uso meramente descriptivo y se refiere principalmente a las estrategias discursivas o ideológicas de la facción empresarial en cuestión, misma que se distingue por su convocatoria a la sociedad civil e incluso al pueblo, a los que contraponen al gobierno; por su invocación a símbolos de integración de carácter universal (tales como la libertad, la democracia y la solidaridad), y por la búsqueda de la restitución de "valores trascendentes" que —argumentan— forman parte de la cultura del pueblo. Destaca asimismo la equivalencia que en su discurso establecen entre el interés privado y el interés público, orientada a establecer un liderazgo social.

⁸ Tirado, Ricardo y Luna, Matilde, "Empresarios entre radicales neopanistas y moderados neopriistas", en *El Cotidiano*, México, año 4, núm. 18, julio-agosto de 1987.

por la naturaleza global de sus intervenciones y en este sentido supone una relación necesaria entre economía, política y ética. Concuera con la tecnocrática en su marcado antiestatismo, pero se distingue de ésta en la articulación que establece entre el predominio del mercado, la defensa de valores de corte conservador y la democracia.

El contenido de esta demanda democrática, se refiere a una limitación del presidencialismo, a través del fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial, la conformación de comisiones de corte bipartita encargadas de la formulación de políticas públicas, la "vertebración" de la sociedad civil, el libre juego de los partidos políticos y procesos electorales limpios. Pero como se mostró en diferentes coyunturas, la vocación democrática empresarial tiene límites muy precisos, pues se reduce a limitar al presidencialismo mediante la implantación de un espacio de juego político bipolar (gobierno-derecha). Así lo comprobó el silencio empresarial casi unánime ante los fraudes electorales en perjuicio de la izquierda en el sonado caso del municipio de Juchitán, Oaxaca y en los recientes comicios federales de 1988.

Mientras que los tecnocráticos están muy asociados al gran capital y tienen una posición clave en el Consejo Coordinador Empresarial (el organismo máximo del empresariado nacional), la facción populista involucra a segmentos de éste (también vinculados al sector externo) y a pequeños y medianos empresarios; tiene una base fundamentalmente en provincia y sobre todo en el norte; sus organizaciones más importantes son la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) y la Concanaco (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), y ejerce además una influencia entre otros sectores no empresariales, misma que se articula en torno a demandas que van más allá de los intereses de clase y de partido aún cuando no los excluye. En este sentido, pone un énfasis particular en el tratamiento de asuntos sociales y morales, y se caracteriza por la utilización de un lenguaje más universal y por su convocatoria a la sociedad civil.

Sus particularidades radican en su mayor voluntad de poder; en el carácter nacional de su proyecto —aún cuando sin rigor metodológico—; en el carácter público de sus intervenciones, orientadas a legitimar su incidencia en nuevos espacios políticos y a implantar cambios más permanentes; y en una nueva rearticulación de elementos liberales y conservadores,⁹ a la manera del conservadurismo

liberal emergente en los años setenta en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, a diferencia de estos movimientos que alcanzaron el triunfo electoral en los Estados Unidos con Ronald Reagan y en Inglaterra con Margaret Thatcher, pueden señalarse como características específicas del movimiento nacional de la derecha, el protagonismo de los dirigentes empresariales, su demanda de democratización (en los términos planteados) y su posición mucho más débil, aunque ya efectiva, en la correlación interna de fuerzas políticas e ideológicas.

La facción tecnocrática

Con un antecedente clave en la creación del Consejo Coordinador Empresarial en 1975,¹⁰ la facción tecnocrática ha fortalecido sus organismos de representación bajo el concepto de instituciones "libres" que si bien gozan del reconocimiento y estímulo gubernamental, no están sujetas a reglamentaciones gubernamentales. La búsqueda de la apertura de espacios estatales a intereses privados organizados está orientada a la obtención de una mayor autonomía respecto del gobierno y de una posición más definitiva en la toma de decisiones, de la cual se intenta reducir e incluso excluir la participación de los sectores populares organizados. Aunque a estos últimos siempre se les considera en el establecimiento de compromisos, con frecuencia tan sólo para legitimarlos.

Dentro del CCE la facción tecnocrática se sustenta en un tríó de agrupaciones muy selectas (las asociaciones de casas de bolsas y compañías de seguros y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) que afilian solamente a un reducido número de prominentes empresarios y grupos económicos que, además, mediante dobles y triples afiliaciones, incrementan aun más su sobrerrepresentación respecto a otros organismos de membrecía muy amplia como la Concamín o la Canacintra, también integrantes del CCE (véase el cuadro del apéndice).

El liderazgo de la clase a través del CCE, en la coyuntura política de la sucesión presidencial, recayó en un empresario tecnócrata, Agustín F. Legorreta. Llega así al liderazgo nacional del empresariado, uno de los más prominentes miembros del sector privado.—hecho sin precedentes en toda la historia empresarial— tanto por sus intereses económicos, como por su trayectoria política en la representación de intereses ligados a las principales

⁹ Sobre el conservadurismo liberal véase una exposición más amplia en Luna, Matilde, "Los empresarios, el sistema político y la democracia", en Pérez, Germán y León, Samuel, *17 ángulos de un sexenio*, México, Plaza y Valdés, 1987.

¹⁰ El CCE, organismo cúpula del sector privado nacional asocia a siete importantes agrupaciones, a través de las cuales integra a un total aproximado de 650,000 empresarios, principalmente del sector urbano (véase el cuadro del apéndice).

fracciones empresariales: la financiera y la exportadora, quien ha sido presidente del Banco Nacional de México, de la Casa de Bolsa Inverlat y de Seguros América (las tres instituciones son de primerísimo nivel en sus respectivos ramos), y dirigente máximo de la Asociación de Banqueros de México (desaparecida a raíz de la nacionalización bancaria), del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, y del selecto Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

En lo que concierne a su posición respecto al sector obrero, la facción tecnocrática ha privilegiado los aspectos productivos sobre los distributivos y ha desplegado —como los populistas— una crítica sistemática a los sindicatos de las empresas estatales, a la burocracia sindical, a los mecanismos de negociación en bloques y los vínculos entre el partido y los sindicatos. Propone la reducción de las negociaciones obrero-patronales al ámbito de la empresa, así como la sustitución de las categorías de sector privado y sector social por la de productores y consumidores, propias de los esquemas neoliberales. Sin descartar los acuerdos personales y las reuniones informales, particularmente con el presidente de la República, ha promovido la creación de una mutiplicidad de comisiones bilaterales entre el gobierno y los empresarios en los más variados asuntos de la política económica, incluyendo el financiamiento y la privatización de empresas estatales. Si bien rechaza una “planeación gubernamental”, demanda en cambio una planeación “democrática” que incluye: frente a la discrecionalidad gubernamental, el establecimiento de reglas claras de decisión; su involucramiento en la definición de políticas de sectores estratégicos bajo control estatal y una posición más determinante en la definición de las orientaciones generales de la política económica, en la que figuren ya no como meros “consultores” del gobierno, y una planeación obligatoria de las actividades gubernamentales e indicativa para el sector privado. Con estos supuestos, ha comprendido las ventajas de la planeación en la formulación de las políticas públicas y también de su necesaria base de consenso, de aquí que si bien ha criticado el corporativismo estatal, ha elogiado sin embargo “el comportamiento responsable” del sector obrero.

La facción populista

La facción empresarial populista ha intentado capitalizar la crisis, el descontento de amplios sectores de la población resultante de las formas burocráticas y corporativas, a través de las cuales se desarrolló el estado intervencionista, el deterioro de la legitimidad del régimen y la deficiencia de

las políticas gubernamentales para afrontar los problemas más urgentes.

A diferencia de la posición tecnocrática que tiene como interlocutor al gobierno, la populista mediante su visión amplia que unifica elementos económicos, culturales, éticos y específicamente políticos y la utilización de símbolos universales, se dirige principalmente a la sociedad. En su relación con el gobierno tiende a predominar más la confrontación que la negociación y recurre a la movilización de sectores resentidos por la crisis y las políticas estatales. En su demanda de una mayor democratización de la sociedad, convoca, a los contribuyentes, a las amas de casa, a los jóvenes, a los padres de familia, a los consumidores, a los católicos o a los votantes, los que habrán de “vertebrarse” en un nuevo tejido social a través de “organismos intermedios”.

Más aún, destaca la disposición de los populistas a ejercer una dirección política, intelectual y moral a través del PAN. En este sentido es notorio el desempeño de un grupo de empresarios, reducido en su número pero muy significativo por los puestos de dirección que han ocupado en las organizaciones empresariales, que en los últimos años se han lanzado como candidatos a puestos de elección popular por el PAN. Los casos más conspicuos son los de Adalberto Rosas, expresidente de la Coparmex local en Ciudad Obregón y luego candidato a la gubernatura de Sonora, Fernando Canales Clariond, exvicepresidente de la Concanaco y más tarde candidato a la gubernatura de Nuevo León, Francisco Barrio Terrazas, expresidente de la Coparmex local en Ciudad Juárez y luego candidato a la gubernatura de Chihuahua y, finalmente, Manuel J. Clouthier, expresidente de la Coparmex y el CCE y posteriormente figuró como candidato a la gubernatura de Sinaloa y a la presidencia de la República en 1988.

En el marco de las contradicciones propias del régimen, la facción populista ha recurrido a su experiencia en el campo de la movilización social, a sus alianzas tradicionales (por ejemplo con el PAN y la Iglesia) y a sus viejas organizaciones como la Coparmex,¹¹ pero ha configurado un nuevo movimiento en el que su moral conservadora se legitima a través de la adopción de la libre empresa como símbolo de la libertad y de su invocación a la democracia.¹² Ese estilo de actividad se hace

¹¹ Tirado, R., *Op. cit.*

¹² Desde esta perspectiva puede destacarse la reactivación de dirigentes empresariales de los movimientos anticomunistas de los años cincuenta y sesenta (tales como Alfredo Sandoval, ligado al Frente Universitario Anticomunista y Rogelio Sada Zambrano, vinculado a la Cruzada Regional Anticomunista), quienes han impulsado nuevas organizaciones que incorporan tanto las doctrinas de la libre empresa como la lucha por la democracia. Son los ca-

claramente visible en las reuniones "México en la libertad" a raíz de la nacionalización de la banca, mismas que dieron lugar a un virtual movimiento de derecha.¹³

En las asambleas nacionales de la Coparmex y en los foros de los movimientos sociales en los que han participado, los populistas se han expresado de una manera amplia. De acuerdo con sus intervenciones, conclusiones y programas, la idea directriz es que la economía social de mercado que incluye la "modernización integral", supone la permanencia de los valores culturales y por tanto la recreación de una moral que despeje las deformaciones desarrolladas por un largo periodo de intervencionismo estatal económico, político y educativo, que es opuesto a un "orden natural". Es por ello que para sus dirigentes, la participación política de los empresarios y su intervención en la formación de valores "trascendentes" es indispensable para avanzar en la modernización del país.¹⁴

En lo que concierne a las relaciones obrero patronales, los populistas, partiendo de la consideración de la empresa como "la genuina comunidad", han propuesto una "concepción humanista" del trabajo y del trabajador como "persona" que apunta no sólo al control de sus reivindicaciones salariales sino también de su cultura, sobre la base de criterios de productividad, solidaridad y libertad sindical como precondition de la libertad de emprender. En su crítica al sindicalismo, a los líderes sindicales gobiernistas y a los representantes "socialistas y comunistas", los empresarios han desarrollado una estrategia discursiva en la cual estos dirigentes están con el gobierno y ellos con el pueblo.

Los de el Ejército Democrático del norte, el Frente de Solidaridad Empresarial y Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana. Esta última organización de carácter nacional, lo mismo propone la movilización de los contribuyentes, que participa en los movimientos católicos, en la defensa del voto o en la promoción de la "desobediencia civil" al lado del PAN.

¹³ Luna, Matilde, Millán, René y Tirado, Ricardo, "Los empresarios en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, vol. XLVIII, año XLVIII, núm. 4/85, octubre-diciembre de 1985.

¹⁴ Son de mencionarse en este sentido, las campañas promovidas por el Consejo Nacional de la Publicidad que incluyen los *slogans* de "iniciativa privada somos casi todos", "empleate a ti mismo" y "lo mejor de la vida queda en familia". Para los dirigentes de la Coparmex, el gobierno ha contribuido al deterioro de la familia con su "educación laicisante", con sus campañas de planificación familiar y contra el sida, las que —sostienen— "fomentan los vicios", "los desórdenes sexuales", "los crímenes de las mujeres que abortan"; que atentan en suma "contra la cultura del pueblo". Por ello proponen "vigilar la neutralidad ideológica" de la educación pública, "desterrando los prejuicios contra la libre empresa" y "acabando con el ateísmo" y suplir a las organizaciones sociales "de naturaleza potencialmente conflictiva" tales como sindicatos de maestros, profesionistas o asociaciones estudiantiles.

Las bases de la unidad de la clase

En el proceso político de los últimos años, las facciones tecnocrática y populista, aún cuando mantienen algunos principios incompatibles, han tenido como base común su acentuado antiestatismo, lo que aunado a la diferencia en sus campos de atención (la primera el de las relaciones económico administrativas y la segunda el de la política partidaria y electoral y el de la sociedad) les ha permitido actuar de manera complementaria frente a ciertas políticas gubernamentales, como fue el caso del conflicto por la nacionalización de la banca.

Si en el seno del CCE el liderazgo ha sido ganado por la facción tecnocrática y en particular por los líderes más activos en el campo de las nuevas estrategias de desarrollo (los exportadores y los nuevos sectores financieros), la facción populista ha ganado también posiciones importantes al interior del empresariado. Las conclusiones del Congreso Nacional de Empresarios, realizado en noviembre de 1987, en el que participaron el conjunto de los organismos del sector privado, son indicativas en este sentido. Bajo el concepto de "modernización integral" que los populistas han venido manejando, los empresarios propusieron un nuevo marco de relaciones como correlato de la eliminación de "la intervención excesiva del gobierno". Desde su perspectiva, la implantación de la economía social de mercado que demanda, requiere de los siguientes elementos: una mayor apertura comercial, la reducción drástica del déficit público, la eliminación de control de precios, una reforma fiscal que estimule el ahorro y la inversión, incrementos salariales en función de la productividad, reducción y reorientación del gasto público hacia inversiones en infraestructura, privatización de empresas estatales y funcionamiento de las subsistencias con criterio de eficiencia y productividad, reducción del número de servidores públicos y de unidades administrativas.

Estos contenidos más específicos de su economía social de mercado requieren también, de acuerdo a las conclusiones de ese congreso, de la eliminación de la propiedad colectiva (en particular del sistema de propiedad ejidal y del "sector social"); en el terreno educativo, una educación pública "neutral", una mayor participación de las escuelas privadas y de los padres de familia, así como la participación privada en organismos oficiales como las comisiones estatales de educación y la comisión de libros de texto; en lo político, requiere de la reivindicación del equilibrio republicano de poderes, la legalidad electoral y la seguridad jurídica mediante el reforzamiento del poder judicial y de la eliminación de las facultades discrecionales de los funcionarios públicos, por último, se de-

manda una mayor participación de la sociedad, tanto individual como a través de "organismos intermedios".

Aunque difícilmente puede decirse que la facción empresarial populista haya implantado su liderazgo al interior del empresariado, su activismo le ha permitido ganar posiciones importantes. Uno de los factores que han incidido negativamente en el ejercicio de su liderazgo es sin duda su vinculación con el Partido Acción Nacional, con lo que se obstaculiza la negociación directa con el gobierno a la manera en que lo hace la facción tecnocrática. Es de señalarse sin embargo, que desde una perspectiva más amplia, la beligerancia de los populistas ha influido indirectamente para que se abran nuevos espacios estatales a otras fuerzas empresariales, entre ellas desde luego a la facción tecnocrática, pero también a la facción proteccionista. La creación de la Asociación Nacional de Promotores del Desarrollo que agrupa a empresarios en el PRI, la participación muy activa de algunos destacados líderes empresariales en los actos de campaña de Salinas de Gortari y las candidaturas a puestos de elección popular de exdirigentes empresariales de organizaciones que tradicionalmente se han alineado con el gobierno, son muestra de estas tendencias.

Una cuestión fundamental es que pese a todo subsiste la unidad política del empresariado, misma que se manifiesta en la existencia del CCE, ya que en su seno conviven sin grandes fisuras visibles las tres facciones analizadas. Ello no obstante la gran diversidad y los intereses contradictorios del enorme número de afiliados a la organización cúpula del empresariado nacional.

Puede decirse que cualquier cálculo político ha de considerar la fuerza del empresariado en su conjunto, sobre todo por las tendencias que apuntan —tanto en el orden interno como el externo y desde muy variadas posiciones político-ideológicas— a enterrar el Estado intervencionista, al menos tal y como se desarrolló, y a disolver el viejo corporativismo.

Sin embargo, su movimiento no ha tenido el impacto global esperado por sus dirigentes. A ello han contribuido la incapacidad de las políticas neoliberales para remontar la crisis, las escasas pruebas de que políticas similares aplicadas en otros países tengan un resultado efectivo y el comportamiento especulativo de los empresarios que ha puesto en cuestión su capacidad de liderazgo social.

ciales del periodo de Miguel de la Madrid, no parece fácil calificarlo ni como un periodo de conflicto ni de concordia. Más bien parece tratarse de una etapa de transición en la que ambos actores procuran, sin lograrlo, establecer las bases de una nueva alianza que sustituya a la que destruyeron la crisis y la nacionalización de la banca privada en 1982.¹⁵

La incapacidad de ambos actores para lograr ese nuevo acuerdo, obedece básicamente a la permanencia de las condiciones que hicieron posible la inflación y la ganancia especulativa, en detrimento de la inversión productiva y el crecimiento de la economía, y a la insatisfacción por parte del gobierno de un conjunto de demandas empresariales: la aplicación radical de las políticas neoliberales (incluyendo la devolución de la banca); la eliminación de la propiedad colectiva; el reconocimiento de más espacios políticos en las instancias estatales donde se formulan las políticas públicas; y el restablecimiento del equilibrio republicano de poderes, básicamente mediante el reconocimiento de los triunfos electorales de la oposición de derecha.

No es sino hasta el 15 de diciembre de 1987 que, ante la profundidad de la crisis, el disparo de la inflación y la proximidad de la elección presidencial, ambos actores parecen sentar las bases de un sólido acuerdo con la firma del Pacto de Solidaridad Económica (PASE).

El PASE firmado por los sectores gubernamental, social y privado, más que lo que su nombre indica, consiste, desde la óptica estrictamente económica, en un programa de contingencia anti-inflacionaria que busca una *détente* en medio de la crisis, que permita encontrar una ulterior salida estructural a la misma. Desde la perspectiva política, después de tres lustros de contradicciones entre los empresarios y el gobierno, con el PASE se está firmando lo que puede ser el inicio de un proceso concertado que lleve a la reconstrucción del bloque en el poder, con nuevas reglas, grupos y pesos específicos a su interior, así como un replanteamiento de su relación con el resto de la sociedad, que no puede menos que influir sobre el sistema político en su conjunto.

Lo que está en juego en esta coyuntura es la transformación sustantiva de la estructura económica y un ajuste político acorde con la nueva racionalidad. Los hechos inmediatos que articulan el acuerdo en el corto plazo —PASE— son la inflación y las elecciones del 6 de julio.

En lo que respecta a la lógica económica, el pac-

El Pacto de Solidaridad Económica

Vistas globalmente las relaciones entre los empresarios y el gobierno durante los cinco años ini-

¹⁵ Para la discusión de los antecedentes del PASE, véase Garrido, Celso, Jacobo, Edmundo y Quintana, Enrique, "Crisis y poder en México: un ensayo de interpretación", en *Estudios Sociológicos*, México, número 15, septiembre-diciembre 1987.

to puso de manifiesto, en términos reales y no sólo discursivos un reconocimiento general de que la inflación es un enemigo común.

Para los sectores populares, asalariados y campesinos, lo anterior ha sido obvio y se manifiesta en los siguientes elementos: decremento del salario real e incremento del desempleo; precios de garantía de los productos agrícolas básicos que se han convertido en la seguridad de escasa o nula rentabilidad, migración y rentismo de las parcelas; deterioro general de los servicios públicos y las condiciones de vida.

Para el gobierno la situación económica empezó a manifestar síntomas de ingobernabilidad, como lo muestran el desplome de la bolsa de valores en octubre de 1987, el déficit del gasto público y las deudas internas y externas que alcanzan dimensiones tan gigantescas que de continuar su tendencia amenazan con pasar al terreno de lo incontrolable, cancelando cualquier posibilidad de recuperación.

Para el sector empresarial la inflación comenzó a dejar de ser una vía de ganancias extraordinarias. El mercado interno se redujo considerablemente y aún en una estructura oligopólica como la existente, el mercado no podía resistir incrementos indiscriminados de los precios.

Asimismo se han reducido las posibilidades de ganancias por la vía especulativa, dada la caída de la bolsa, los movimientos moderados en el tipo de cambio (posible por las grandes reservas que se han mantenido en el orden de los 15 a 12 mil millones de dólares entre finales de 1987 y noviembre de 1988) y la incertidumbre sobre los bonos estatales. Hay también encarecimiento y restricción del crédito y la masa monetaria, que dificultan las posibilidades de financiamiento de las empresas, una vez reducida la especulación.

La economía se acercó a una recesión difícil de remontar, al pasar de un sobrecalentamiento a una congelación igualmente explosiva.

Para el gobierno y los empresarios queda claro que la recuperación por conducto de la reducción del salario real y el endeudamiento empezaba a tocar fondo si no se hacían ajustes internos y se utilizaban de otra manera los excedentes.

Por todo lo anterior, las condiciones obligaron a la concertación que se traduce en el PASE, del cual se pueden distinguir varias fases. Una primera que ha incluido la congelación de los salarios, los precios de los productos agrícolas básicos y el tipo de cambio; ajustes de los precios relativos, empezando por los bienes y servicios del sector público (que se incrementaron en un 85%); el anuncio al sector privado de un plazo de tres meses para el ajuste de sus precios, y el compromiso gubernamental de reducir, seguir reduciendo el déficit del gasto público y profundizar más la política de pri-

vatzación de empresas públicas. En una segunda fase, se congelan los precios de casi todos los factores, se reducen y fijan las tasas de interés, pero con control del crédito, aunque se deja un espacio para que algunos sectores rezagados ajusten precios.

Se trata en suma de un plan de choque a la mexicana, gradual, anunciado y concertado; forzado por la necia realidad y la coyuntura política electoral.

Bajo esta lógica es posible un control de la inflación; sin embargo, un plan de esta naturaleza no puede prolongarse indefinidamente, es sólo una medida de ajuste. Lo importante es qué se puede esperar después de esto. Para que la historia tuviera un final feliz, tendrían que darse al menos las condiciones para un crecimiento modesto en el corto plazo.

El crecimiento plantea dos problemas no explícitos en los textos del PASE: la deuda externa y la incógnita de quién dirigirá el crecimiento, ¿el gobierno con restricción de gasto y disminución de su sector productivo o los empresarios? y si, como parece, este es el caso, ¿cuáles empresarios?

Por lo tanto el problema de fondo no es la inflación, aunque si sea lo inmediato a resolver; ésta es sólo la expresión visible de una estructura productiva ineficiente y deformada. Lo que está en juego es pues, el conjunto de la estructura económica.

En cuanto a los implícitos políticos del PASE, hay signos de que desde antes de su celebración, los empresarios habían participado activamente en la toma de importantes decisiones políticas; una de ellas fue la designación del candidato del PRI a la presidencia de la República.

El PASE contuvo también algunos acuerdos netamente políticos, que aunque no fueron externados públicamente, es evidente que estaban ahí.

Los principales de éstos son los siguientes: el compromiso de las facciones empresariales de apoyar al PRI y a su candidato presidencial en el proceso electoral que culminaría el 6 de julio de 1988. Por parte del gobierno parece obvio un compromiso de acentuar las políticas de corte neoliberal (en particular el control del gasto público y la privatización de más empresas paraestatales) y también es probable que haya accedido a ceder a los empresarios más espacios políticos dentro del gobierno y el PRI, desde los cuales intervendrán de manera aún más activa en la formulación de la política económica y la toma de decisiones políticas; es posible incluso que se haya pactado entonces la designación de algunos empresarios como secretarios de Estado en el futuro gabinete presidencial.

Los antecedentes de estos compromisos, cuyo supuesto es la negativa empresarial a secundar al

candidato panista, son los siguientes: a fines de 1987 el PRI y el gobierno, al igual que un amplio sector de la opinión pública y los analistas especializados, seguían viendo al PAN y a su candidato como el principal rival de Salinas en la contienda electoral. Casi nadie pudo prever la gran importancia que cobraría el fenómeno cardenista que entonces comenzaba a emerger.

Debido al ascenso panista a lo largo del sexenio, la burocracia política temía que un sector importante del empresariado, básicamente el nucleado por las organizaciones de la facción populista (Coparmex y Concanaco), rompiendo todos los precedentes en materia de elecciones presidenciales, se manifestara favorable al PAN y respaldara luego sus eventuales quejas de fraude electoral y su escuela deslegitimadora.

A esto debe agregarse que la alta competitividad de las campañas panistas, las repetidas acusaciones de fraude —apoyadas frecuentemente por los partidos de izquierda— y las movilizaciones que las acompañaron, hicieron mella en la credibilidad de los procesos electorales y la burocracia oficial no quería exponerse a más riesgos.

Esto a pesar de que la candidatura panista no constituía una alternativa presidencial realmente viable, en buena parte debido a los duros (aunque no muy claros) reveses electorales experimentados por el PAN, de los cuales el ejemplo más típico fue en 1986 cuando virtualmente le fue escamoteado el triunfo en la contienda por la gubernatura de Chihuahua, mismo que hubiera significado la primer derrota del partido oficial en una disputa electoral por el gobierno de un estado de la federación.

Con estos antecedentes se entiende entonces que la oferta hecha por el gobierno a los empresarios en el PASE, resultó irresistible aun para la filopanista facción populista.

Balance del 6 de julio de 1988

Los resultados de las elecciones del 6 de julio de 1988, sintetizables en la gran presencia política conquistada por el cardenismo (de tintes nacional-populares),¹⁶ el estancamiento electoral del PAN y en la escasa credibilidad del triunfo del candidato del partido oficial Carlos Salinas de Gortari, anuncian que la correlación de fuerzas ha cambiado y se producirán fuertes presiones para nuevos ajustes al pacto y al sistema políticos.

¹⁶ El cardenismo es un movimiento reivindicador de la revolución mexicana, a la que sus líderes consideran traicionada por los actuales dirigentes del gobierno y el partido oficial, al cual pertenecieron hasta fines de 1987.

La escasa credibilidad del triunfo salinista coloca al gobierno y al presidente electo en una grave situación de ilegitimidad que lo debilita enormemente, tanto ante sus adversarios como ante sus sostenedores.

Por otra parte, el cardenismo es visto con desconfianza por toda la derecha y en particular por el empresariado. Es por ello que tienden a exigir al gobierno que ponga límites estrechos a la acción política de los cardenistas.

Paradójicamente, el gran caudal de votos obtenidos por el cardenismo, sea cual sea su monto real, se ha convertido en un escollo para la negociación hacia una transición democrática del país.

La copiosa votación a su favor y las evidentes irregularidades en el proceso electoral, han obligado a los cardenistas a insistir en su reclamo —al parecer con ciertos fundamentos— de que ganaron la presencia de la República, so pena de defraudar a sus bases y correr el riesgo de ser rebasados por ellas.

Visto desde el bando contrario, ese mismo reclamo hace difícil la negociación para el nuevo equipo gobernante, porque da un pretexto sonoro (aunque falaz) a sus adversarios empresariales y sindicales, en el sentido de que, como lo expresó con claridad Fidel Velázquez (el más prominente líder obrero desde los años cuarenta), las reformas democratizadoras han puesto al PRI en peligro de perder la presidencia de la República misma.

En los empresarios el temor al cardenismo ha producido un compás de espera de las inminentes decisiones del nuevo equipo gobernante.

Este compás de espera se manifiesta en un bajo perfil de su presencia política; un repliegue de los grupos empresariales más belicosos en contra del gobierno; una tendencia a alejarlos del PAN y acercarlos al presidente electo impugnado, el gobierno y al PRI, para apoyarlos ante lo que vislumbran como una nueva amenaza. Este apoyo se manifestó repetidamente en las sucesivas renovaciones del PASE y en el casi unánime silencio empresarial ante las evidencias de fraude electoral en perjuicio, sobre todo, del cardenismo.

Perspectiva

La complejidad de la crisis mexicana hace difícil el análisis y riesgoso el aventurar juicios acerca de la posible dirección que asumirán el proceso político mexicano y la acción política de los empresarios.

Sin embargo, se arriesga aquí un intento de pronóstico en el que se contemplan básicamente tres escenarios que llamaremos: 1. "Más de lo mismo o negociación con la derecha"; 2. "Reformismo

ofical o negociación con la izquierda" y 3. "Negociación con la derecha con concesiones a la izquierda", en los que el actor y la variable fundamental son el nuevo equipo gobernante y su política.

1. "Más de lo mismo o negociación con la derecha": Los supuestos básicos de este escenario son las siguientes políticas del gobierno:

- a) Empecinamiento del nuevo equipo gubernamental en su programa económico neoliberal.
- b) Estímulo a la economía atrayendo grandes inversiones mediante una gran apertura hacia las inversiones extranjeras y nacionales.
- c) Cerrazón al reconocimiento de los espacios políticos ganados legalmente por la oposición, sobre todo de izquierda.
- d) Control de las variables fundamentales de la economía.
- e) Consecución de cierto alivio de la deuda pública externa.

Las principales consecuencias a corto y mediano plazo serían probablemente:

- a) Cierta crecimiento de la economía, derivado de aumentos en la inversión productiva nacional y extranjera y la reducción del servicio de la deuda externa, que a mediano plazo podría comenzar a tener efectos en el empleo y los salarios, frenando su deterioro e induciendo una gran diferenciación salarial.
- b) Debilitamiento de la voluntad política de los empresarios y reflujo de sus demandas de mayores espacios políticos propios y públicos. En este escenario la facción tecnocrática ejercería el liderazgo.
- c) Probable disminución del énfasis en el discurso empresarial en torno a la democracia y aparición en él del tema de la "ingobernabilidad" de la democracia.
- d) Los empresarios y las capas altas de los sectores medios se convierten en el principal apoyo social del nuevo gobierno, sin dejar por ello de plantearle nuevas demandas por la vía de las negociaciones tradicionales al interior del gobierno y el PRI.
- e) A corto plazo habrá un mayor deterioro de la economía popular y más descomposición social por la vía de la delincuencia y fenómenos conexos.
- f) Ocurrirá una pérdida prácticamente total de la legitimidad popular del gobierno y su partido.
- g) Incremento de la conflictividad social y aparición de brotes espontáneos de violencia y posible resurgimiento de la guerrilla.
- h) Intensificación y generalización de la represión gubernamental.
- i) Aunque la gran heterogeneidad del cardenismo da oportunidad a las maniobras del gobierno

para desarticularlo, es posible el desarrollo de un gran movimiento político electoral nacional de centro izquierda o hasta de toda la oposición real, con un candidato presidencial único que ponga en jaque al gobierno y su partido y se desencadene una crisis política de consecuencias impredecibles.

2. "Reforma oficial o negociación con la izquierda": Las principales líneas de política dadas por supuestas en este escenario son:

- a) El nuevo equipo, reconociendo la profundidad de los reclamos populares que se canalizaron por la vía del cardenismo, se decide por una reforma que de respuesta, aunque sea parcial, a esos reclamos, sin hacer caso de la oposición de derecha nacional e internacional.
- b) La reforma apuntaría a un crecimiento de la economía fincado básicamente en una vuelta al intervencionismo estatal y una mayor atención al mercado interno, liberando recursos mediante una toma de posición más enérgica en materia de deuda pública externa e interna.
- c) La política económica se fija como objetivos centrales el crecimiento y la distribución; por tanto, se dictan medidas tendientes a aumentar los salarios y el gasto social.
- d) Reconocimiento de los espacios ganados legítimamente por la oposición, sobre todo de izquierda.

Las principales consecuencias a corto y mediano plazo sería probablemente:

- a) Reacción derechista extranjera que se manifestaría, en grados variables de intensidad, en represalias desde el exterior en la forma de suspensión de créditos, inversiones e importaciones; embargos; boicots; deportaciones de indocumentados, etc.
- b) Reacción derechista interna que se manifestaría primero en desinversiones y fugas de capitales y más tarde desarrollo de un gran movimiento social anticomunitas en el que nuevamente, como en el pasado en coyunturas de conflicto entre el gobierno y los empresarios, converjan los empresarios con una porción significativa de los sectores medios y el PAN y la Iglesia. En este escenario la facción populista asumiría el liderazgo del empresariado.
- c) Recuperación parcial de la deteriorada legitimidad popular del presidente de la República y el gobierno, al iniciar la aplicación de las políticas descritas.
- d) Debido en buena parte a la reacción derechista, posible descontrol de la economía, cuyos síntomas más claros serían una devaluación del peso y un disparo de la inflación vertiginosos.
- e) Deslegitimación popular del presidente y el gobierno, a causa de los efectos devastadores de

una economía descontrolada en el poder adquisitivo de amplísimos sectores de la población y la acción del movimiento de la derecha.

- f) Fractura de la unidad de la burocracia política y surgimiento de una facción derechista que contemporizaría con la reacción de derecha y trataría de frenar y cancelar el proceso desde adentro.
- g) Neutralización de la izquierda, por efecto de la gran movilización de la derecha.
- h) Próximo candidato presidencial proveniente de una derecha más directa.

De los tres escenarios planteados, este es, tal vez, el menos probable.

3. "Negociación con la derecha y concesiones a la izquierda":

En este escenario se consideran como supuestos las siguientes líneas de política:

- a) Continuación del programa neoliberal, salvo en materia de gasto social, en el cual habría un incremento que se canalizaría selectivamente para atender lugares y grupos explosivos.
- b) Estímulo a la economía atrayendo grandes inversiones mediante una gran apertura hacia las inversiones extranjeras y nacionales.
- c) Consecución de cierto alivio en la presión de la deuda externa.
- d) Control de las principales variables de la economía.
- e) Reforma electoral de fondo que sienta las bases de procesos electorales limpios, en los que se reconozcan los triunfos reales de la oposición.
- f) Reforma en los medios de comunicación social que incremente los espacios de la crítica independiente y la oposición política.
- g) Reforma del PRI modificando los pesos relativos de sus organizaciones sectoriales y territoriales; de modo tal que en el saldo resulte favorecida la política ciudadana.

Las consecuencias visibles de tales políticas serían a corto y mediano plazo:

- a) Cierta crecimiento de la economía con sus efectos sobre el empleo y el salario, aunque menores que en el primer escenario.
- b) Consolidación de tres grandes bloques políticos: el del PRI, el del PAN y el de centro izquierda cardenista.
- c) Pierde el PRI la mayoría absoluta en la cámara de diputados y algunas gubernaturas estatales, en beneficio del PAN en el norte del país y del cardenismo en el sur.
- d) Recuperación parcial de la legitimidad por parte del PRI.
- e) Presencia fuerte de las facciones tecnocrática y populista con cierto predominio de la segunda.

A modo de conclusión puede decirse que en el periodo de transición por el que atraviesa México,

los empresarios han renovado su fuerza política al influir en la implantación de estrategias de corte neoliberal, al intervenir de manera directa en el ámbito de la política cuestionando el sistema de representación y al incidir en la construcción de una nueva fuerza social de derecha de carácter liberal conservador.

Después del conflicto por la nacionalización bancaria, la reconstrucción del pacto entre los empresarios y el Estado, se asentará en el plano de los principios básicos de las políticas de desarrollo, las que tienden a colocar a la empresa privada como el núcleo en torno al cual se estructura la política económica. Persiste sin embargo, a lo largo del sexenio, un desacuerdo político que se expresa en un cuestionamiento al sistema de representación y en el despliegue de diversas estrategias de participación política empresarial, que permiten distinguir dos importantes facciones políticas empresariales: la tecnocrática y la populista o liberal conservadora. La primera, constituida fundamentalmente por el gran capital, negocia por una posición exclusiva en la toma de decisiones; mientras que la segunda, con una base social compleja, opta por una confrontación con el gobierno —a través de su intervención directa en el partido de oposición y de la articulación de una fuerza social de derecha— que se modera durante la coyuntura de la elección presidencial.

La profundidad de la crisis económica y la insuficiencia de las nuevas políticas adoptadas para remontarla, obligan a los principales actores —los representantes de los sectores público, social y privado— a la concertación del Pacto de Solidaridad Económica, el que a pesar de su importancia deja sin resolver un conjunto de problemas centrales para la consolidación de un verdadero pacto social, que implicaría una amplia concertación y convocatoria, así como bases sólidas para un futuro crecimiento.

Paralelamente, la emergencia de una tercera fuerza política nucleada en el cardenismo, propicia un acercamiento político entre el gobierno y los empresarios, pero como contraparte, la presión popular hace problemática la aplicación lineal de políticas neoliberales, y deja al descubierto los límites de la demanda empresarial de democratización del régimen de representación.

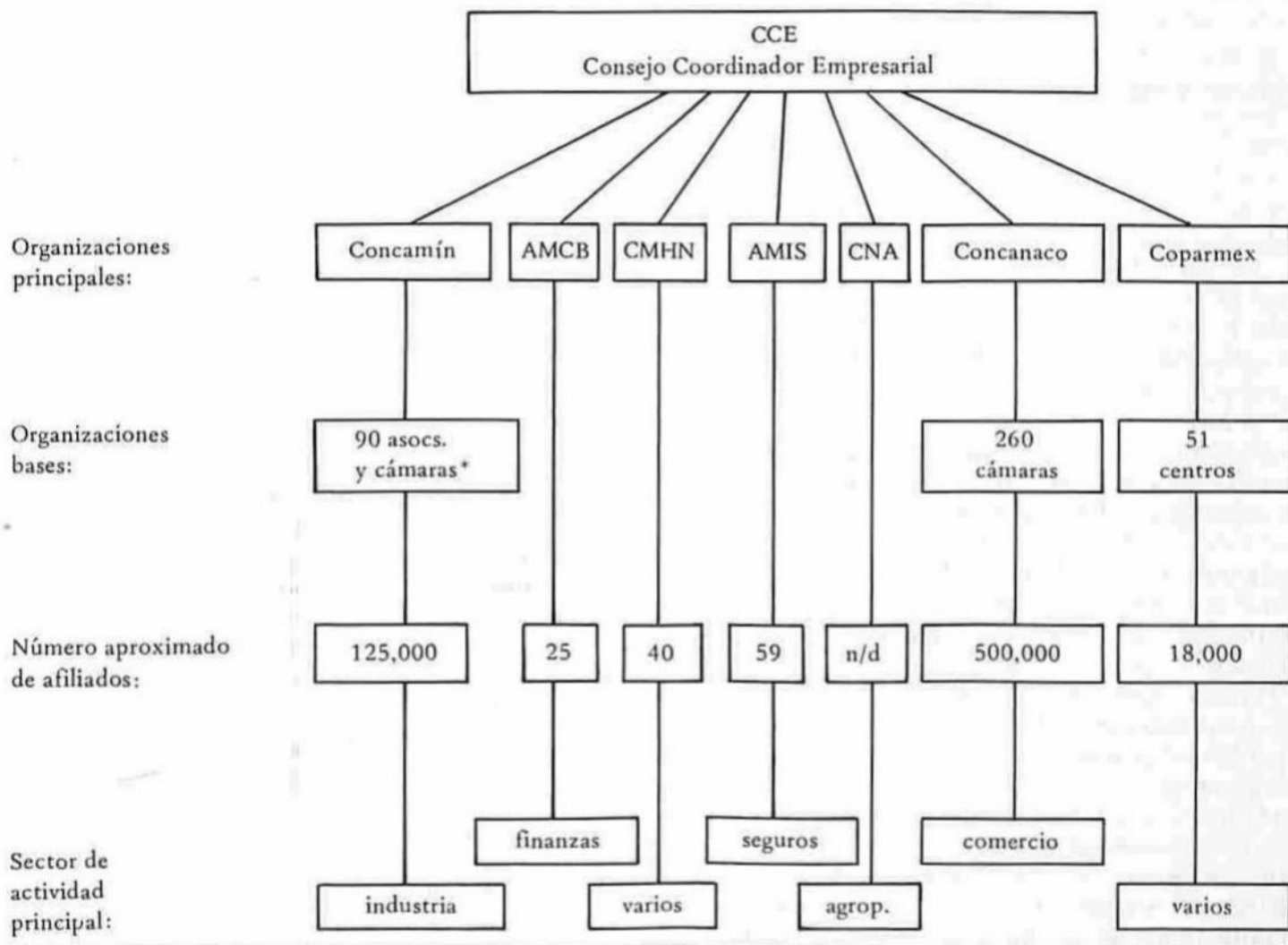
La cúpula empresarial y el gobierno, transitan así del acuerdo sobre la política económica, al pacto social y al pacto político, pero estos acuerdos no son aún definitivos, en buena parte debido a que son muy excluyentes y ha aparecido en la escena política una fuerza de raíz popular capaz de impugnarlos.

Las perspectivas que se presentan en el horizonte, dentro de los límites del propio sistema, pare-

cen ser fundamentalmente dos: la primera, que implicaría la consolidación de esos pactos y que muy probablemente conduciría a un "capitalismo salvaje" con una gran rigidez política y la

segunda, que supondría una difícil pero posible transición democrática acompañada de cierto alivio de algunas demandas populares.

Estructura del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)



*Entre las 90 asociaciones y cámaras de la Concamín figura la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que por sí sola agrupa a unos 75,000 industriales.

Abreviaturas:

Concamín: Confederación de Cámaras Industriales.
 AMCB: Asociación Mexicana de Casas de Bolsa.
 CMHN: Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
 AMIS: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
 CNA: Consejo Nacional Agropecuario.
 Concanaco: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
 Coparmex: Confederación Patronal de la República Mexicana.

Nota:

Las organizaciones base de cada facción empresarial son:
 Facción proteccionista: Concamín y Canacintra.
 Facción tecnocrática: AMCB, CMHN y AMIS.
 Facción populista: CNA, Concanaco y Coparmex.

Fuentes: investigación directa.